



Va Talleres Gráficos por micas del INE

VÍCTOR FUENTES

Tres consorcios presentaron ayer ofertas de entre 54.2 y 59.9 millones de dólares para producir la credencial de elector hasta mayo de 2031, en lo que será el contrato más grande que se ha otorgado para esta identificación, que por primera vez podría quedar en manos del Gobierno federal.

Luego de reclamos al Instituto Nacional Electoral (INE) por convocar una licitación con tiempos recortados, la firma mexicana Litho Formas, asociada con las españolas Inetum e Indra Sistemas, y con Toppan Security de los Emiratos Árabes Unidos, presentó la oferta más baja para producir hasta 94 millones 167 mil credenciales.

El precio intermedio, de 55.6 millones de dólares, lo ofertó Cosmocolor, del empresario Jorge Kahwagi Gastine y su hijo, el ex diputado federal del PVEM, Jorge Kahwagi Macari, asociada con la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM).

Esta última es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación que ya se hace cargo de imprimir las boletas electorales, pero la credencial es un tema distinto, pues implica acceso a datos del Registro Nacional de Electores.

La cotización más alta, finalmente, la presentó el consorcio que brinda el servicio desde 2019, encabezado por las firmas alemanas Veridos y Giesecke y Devrient.

El INE no publicó detalles de las ofertas, pero los

montos aparentemente se refieren al mínimo estimado, que será de 84 millones 959 mil credenciales, es decir, de 64 a 70 centavos de dólares por unidad, por 52 centavos de la ganadora en 2019.

Inetum es un consorcio francés que, en 2021, compró a la empresa española Informática El Corte Inglés (IECISA), que fue parte del grupo de Veridos en la licitación de 2019.

El INE anunciará al ganador el 10 de diciembre. Hoy, el Instituto de Investigaciones Materiales de la UNAM aplicará 14 pruebas a una muestra de 100 credenciales de cada concursante, y si falla una sola prueba, la oferta será desechada.

Una eventual derrota de Veridos obligaría a iniciar un proceso de migración tecnológica y operativa que podría afectar la producción de credenciales hacia mediados de 2026, cuando vencerá el contrato actual, que fue prolongado mediante un convenio, pues vencía al cierre de 2024.

Las bases originales de la licitación tuvieron varios cambios, lo que llevó este miércoles al Comité del Registro Federal de Electores del INE a pedir un informe sobre las razones.

En la junta de aclaraciones del concurso, varias empresas cuestionaron al INE en temas como la tecnología requerida y las características de contratos previos que acrediten experiencia, que deben ser sólo con dependencias de Gobierno, y emisión de al menos 2 millones de credenciales en tres años distintos.